



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ

Bogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil diecinueve (2019)

RADICACIÓN: 11001-33-35-026-2017-00063-00
PROCESO: EJECUTIVO
EJECUTANTE: JORGE HUMBERTO SALAMANCA ROJAS
EJECUTADA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y PARAFISCALES – UGPP
ORDINARIO: 25000-23-25-000-2004-07639-01

A través de sentencia calendada 13 de mayo de 2019, el Despacho declaró no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada y, ordenó seguir adelante la ejecución, disponiendo que se realizara la liquidación del crédito de conformidad con el artículo 446 del C.G.P. (fls. 117-124), siendo esta providencia notificada a las partes en estrados.

La anterior decisión, fue objeto de apelación por el extremo pasivo de la Litis, quien sustentó en la audiencia el recurso, concediéndose el mismo en el efecto devolutivo, razón por la cual se ordenó la remisión del expediente al Superior para lo de su competencia.

Con base en lo anterior, el apoderado de la parte actora procedió a presentar la liquidación de crédito, tal como se puede observar en el memorial obrante a folios 135 a 136 del plenario.

Por su parte, la UGPP guardó silencio en esta etapa procesal, habida consideración que, allegó Resolución No. ADP 009135 del 29 de noviembre de 2018, por medio de la cual extingue el derecho de acción por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad.

Al respecto debe decir el Despacho, que resulta inadmisibile que la entidad ejecutada profiera actos administrativos en los cuales manifiesta extinguir el derecho de acción al haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción, teniendo en cuenta que, el compute de los términos dentro del presente asunto se realizó previo al librar el mandamiento ejecutivo, y tal situación quedó plasmada en la sentencia proferida el 13 de mayo de la presente anualidad, no dando lugar al decreto de la caducidad de la acción ejecutiva. (fl 124 cuaderno copias).

Atendiendo lo improcedente y palmario que resulta el acto administrativo expedido por el subdirector de Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP, se requiere al señor Juan David Gómez Barragán, para que se abstenga de proferir actos administrativos en los cuales extinga el derecho de acción, por el acaecimiento de la caducidad de la acción ejecutiva, habida consideración que, dicho fenómeno fue estudiado por el Despacho previo al librar mandamiento de pago, así como, el mismo fue expuesto en la audiencia antes aludida; de la misma manera, se le recuerda al señor Gómez Barragán, que al tenor de lo dispuesto en el artículo 28 numeral 4° de la ley 1123 de 2007, es deber del abogado estar actualizado en todos los contenidos normativos, inclusive este despacho manifiesta que no es excusa el desconocimiento de la norma, pues el Profesional del Derecho debe tener conocimiento respecto de la suspensión en la contabilización del término de caducidad para efectos de la presentación de la demanda ejecutiva, con ocasión del adelantamiento del proceso de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E., la cual se llevó a cabo desde el 12 de junio de 2009 hasta su conclusión, que tuvo lugar el 11 de junio de 2013, en virtud del Decreto 2196 de 2009 y de la Ley 550 de 1999, por lo que los términos de prescripción y de caducidad de las obligaciones a cargo de la entidad liquidada fueron suspendidos por el espacio de cuatro (4) años.

Por lo anterior, se previene al profesional del derecho en mención para que se abstenga de proferir actos administrativos totalmente improcedentes, so pena de compulsar copias a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; lo anterior, al tenor de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.

Aclarado lo anterior, y de conformidad con lo allegado al plenario, debe el Despacho resolver si es viable o no aprobar la liquidación del crédito planteada por la activa, y para el efecto se analizará lo siguiente:

A. LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO PRESENTADA

LIQUIDACION INTERESES MORATORIOS ART. 177 C.C.A				
Sentencia proferida por el Juzgado veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá de fecha 16 de marzo de 2007				
JORGE HUMBERTO SALAMANCA ROJAS				
FECHA DE EJECUTORIA		20 de agosto de 2008		
FECHA DE PAGO PARCIAL		25 de abril de 2011		
DIAS DE MORA		978		
VALOR		\$25.446.202		

AÑO	MES	DIAS DE MORA	INTERESES	VALOR
Ago-08	31-ago-08	11	2.69%	\$250.868
Sep-08	30-sep-08	30	2.69%	\$684.185
Oct-08	31-oct-08	31	2.63%	\$690.886
Nov-08	30-nov-08	30	2.63%	\$668.599
Dic-08	31-dic-08	31	2.63%	\$690.886
Ene-09	31-ene-09	31	2.56%	\$672.808
feb-09	28-feb-09	28	2.56%	\$607.698
Mar-09	31-mar-09	31	2.56%	\$672.808
Abr-09	30-abr-09	30	2.54%	\$645.061
May-09	31-may-09	31	2.54%	\$666.563

Jun-09	30-jun-09	30	2.54%	\$645.061
Jul-09	31-jul-09	31	2.33%	\$612.988
Ago-09	31-ago-09	31	2.33%	\$612.988
Sep-09	30-sep-09	30	2.33%	\$593.215
Oct-09	31-oct-09	31	2.16%	\$567.959
Nov-09	30-nov-09	30	2.16%	\$549.638
Dic-09	31-dic-09	31	2.16%	\$567.959
Ene-10	31-ene-10	31	2.02%	\$530.490
feb-10	28-feb-10	28	2.02%	\$479.152
Mar-10	31-mar-10	31	2.02%	\$530.490
Abr-10	30-abr-10	30	1.91%	\$486.977
May-10	31-may-10	31	1.91%	\$503.209
Jun-10	30-jun-10	30	1.91%	\$486.977
Jul-10	31-jul-10	31	1.87%	\$491.048
Ago-10	31-ago-10	31	1.87%	\$491.048
Sep-10	30-sep-10	30	1.87%	\$475.208
Oct-10	31-oct-10	31	1.78%	\$467.054
Nov-10	30-nov-10	30	1.78%	\$451.988
Dic-10	31-dic-10	31	1.78%	\$467.054
Ene-11	31-ene-11	31	1.95%	\$513.070
Feb-11	28-feb-11	28	1.95%	\$463.418
Mar-11	31-mar-11	31	1.95%	\$513.070
Abr-11	30-abr-11	25	2.21%	\$468.899

TOTAL INTERESES	\$ 18.219.322
-----------------	---------------

El apoderado judicial de la parte actora señala, que el valor por concepto de intereses moratorios es de \$18.219.322, los cuales se calculan desde la fecha de ejecutoria de la sentencia (20 de agosto de 2008) hasta la fecha en que la entidad demandada realizó el pago parcial del crédito judicial (25 de abril de 2011), con base a la tasa comercial certificada por la Superintendencia Financiera, por lo tanto, al realizar las operaciones aritméticas, arroja el valor arriba señalado.

Conforme con lo anterior, el monto que arrojó la liquidación del crédito efectuada por el apoderado de la parte demandante, ascendió a un monto total de \$18.219.322.

B. TRASLADO

Tal como lo dispone el artículo 446 del C.G.P., de la liquidación de crédito que presente una de las partes, se debe correr traslado a la otra, en la forma prevista en el artículo 101 de la norma, en cuyo término se pueden formular objeciones.

En este sentido, la secretaría del Despacho procedió a correr el respectivo traslado de la liquidación a la parte demandada el día 22 de mayo de 2019, tal como se puede observar en la constancia obrante a folio 137 del plenario, corriendo el término desde el 23 de mayo hasta el 27 del mismo mes y año.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, guardó silencio en esta etapa procesal, pues se limitó a arribar al plenario la Resolución No. ADP 009135 del 29 de noviembre de 2018, por medio de la cual extingue el derecho de acción por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad, y del cual, este Despacho Judicial realizó el pronunciamiento respectivo en líneas precedentes.

En tales condiciones, procede el Despacho a pronunciarse respecto a la liquidación efectuada por la parte ejecutante.

CONSIDERACIONES

Como primera medida, es indispensable reiterar por parte del Despacho, lo anotado dentro de la sentencia que ordenó seguir adelante la ejecución, pues este Despacho Judicial realizó las siguientes precisiones, con el objeto que fueran tenidas en cuenta al momento de realizarse la liquidación del crédito:

“b. Liquidación del crédito

“Por tal razón, el Juzgado hace unas precisiones frente a la liquidación del crédito a realizarse, aclarando que el monto por el cual se libró mandamiento ejecutivo no es necesariamente el valor a cancelar, toda vez que ello está sujeto a la liquidación del crédito, así como de las revisiones que oficiosamente haga el Despacho, pues la suma a pagar en los términos de la sentencia y lo pretendido en el proceso, son únicamente los intereses que generó el capital actualizado o debidamente indexado a la fecha de la ejecutoria de la sentencia, desde la ejecutoria de la sentencia hasta la fecha en que se incluyó en nómina o se realizó el pago del capital debidamente indexado, aclarando que el referido capital indexado a la fecha de la mencionada ejecutoria, no puede ser indexado nuevamente con posterioridad a la fecha de su firmeza; así mismo, que los intereses pretendidos no pueden capitalizarse.”

En este sentido, el mandamiento de pago de fecha 28 de abril de 2017, también indicó lo siguiente:

“En ese sentido se tiene que el numeral 6° de la parte resolutive de la sentencia por este estrado judicial, se impartió orden de cumplimiento a la misma en los términos señalados en la norma ya referida, esto es con la inclusión de los intereses moratorios.

*En el plenario se tiene que la decisión de segunda instancia quedó ejecutoriada el **20 de agosto de 2008**; en virtud de ello, la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. (Hoy liquidada), profirió la Resolución No. PAP 031468 del 30 de diciembre de 2010, por la cual se dio cumplimiento a las sentencias ya identificadas, cuya decisión administrativa fue incluida en nómina en el mes de **abril de 2011**, y que en la misma no se reflejó el pago de intereses moratorios.*

Así mismo se establece que la parte actora solicitó el cumplimiento de la providencia y en razón a ello fue expedido el acto administrativo de cumplimiento.

Por lo expuesto el Despacho librará mandamiento ejecutivo por los intereses moratorios insolutos.

En este punto, debe recordarse el contenido del enunciado normativo previsto en el artículo 1653 del Código Civil, que consagra lo siguiente:

“Artículo 1653. Imputación del pago a intereses. Si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute al capital.

Si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se presumen éstos pagados.

Conforme a la normatividad referida, por regla general no puede imputarse pago a capital si aún no se han satisfecho los intereses, excepto que el acreedor los consienta y/o permita.

Acorde a ello, al presentarse la demanda ejecutiva por los intereses moratorios insolutos, lógico es concluir que la parte ejecutante está aceptando el pago a capital sin haberse cubierto los intereses.

En concordancia con lo expuesto, y teniendo en cuenta que lo que se solicita es librar mandamiento ejecutivo por los intereses moratorios adeudados, se librará mandamiento ejecutivo únicamente por los intereses adeudado conforme al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

(...)

A su vez se precisa que los valores ordenados se encuentran comprendidos desde la ejecutoria de la sentencia hasta la fecha en la que se hizo efectiva la inclusión en nómina del acto administrativo de cumplimiento a la misma”.

Ahora bien, se observa que el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, norma aplicable al momento en que se profirió sentencia de mérito en el proceso ordinario, en relación con los intereses por los cuales se libró mandamiento de pago, disponía:

“Artículo 177. Efectividad de condenas contra entidades públicas. Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada.

(...)

<Apartes tachados Inexequibles – Sentencia C-188 de 1999> Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después de este término.

<Inciso adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma. (...)”

Al respecto, la Corte Constitucional al realizar el control de constitucionalidad de esta norma definió el tipo de intereses que se causan a partir de la ejecutoria de la sentencia y sobre el particular determinó:

“(…) la Administración Pública está obligada por un acto suyo a pagar unas determinadas cantidades de dinero a los particulares con quienes concilia y éstos tienen derecho a recibirlas dentro de los términos pactados. No se pierda de vista que ellos sufren perjuicio por la mora en que la Administración pueda incurrir. Tales perjuicios se tasan anticipadamente mediante la fijación por la propia ley de intereses moratorios.

Para la Corte es claro que el principio de igualdad y la equidad imponen que en estos casos las dos partes reciban igual trato, sin que se justifique en modo alguno que mientras el Estado cobra a los contribuyentes intereses moratorios cuando ellos no pagan a tiempo los impuestos, y ello a partir del primer día de retardo en el pago, las obligaciones en mora a cargo del Estado deban forzosamente permanecer libres de la obligación de cancelar dichos réditos durante seis meses, con notorio perjuicio para los particulares que han debido recibir oportunamente los recursos pactados. Durante ese tiempo, el dinero no recibido por el acreedor pierde poder adquisitivo y no existe razón válida para que esa pérdida la deba soportar el particular y no el Estado, que incumple.

Es evidente la vulneración del artículo 13 de la Constitución Política, toda vez que, con independencia de si el deudor es el gobernado o el ente oficial, el hecho es el mismo; la circunstancia es equivalente; el daño económico que sufre el acreedor por causa de la mora es idéntico; y las obligaciones asumidas por las entidades públicas no tienen alcance jurídico diverso de las que están a cargo de las personas privadas.

*Por otro lado, en la disposición impugnada se muestra con claridad el desconocimiento de los principios de igualdad, eficacia y celeridad, que deben presidir la función administrativa, según el artículo 209 Ibídem. **El Estado, en sus relaciones con los particulares, no puede asumir legítimamente las conductas que censura y castiga si provienen de ellos. Si les exige puntualidad en el pago de sus obligaciones tributarias, y si tan duramente castiga el hecho de que no las cancelen a tiempo, elementales principios de justicia y equidad hacen imperativo que, correlativamente, su propio comportamiento en idénticas situaciones se ajuste a las exigencias que formula a los particulares. Pero, además, la mora en el pago de las obligaciones a cargo del fisco delata, en los servidores públicos responsables, un deplorable descuido que no encaja dentro de los criterios constitucionales que deben inspirar la actividad administrativa.***

Para la Corte, carece de fundamento la justificación que pretende aportar en este caso el Procurador General de la Nación, consistente en que las personas jurídicas de Derecho Público deben administrar sus recursos con base en el correspondiente presupuesto anual de ingresos y gastos, de lo cual pasa a sustentar la constitucionalidad del término de seis meses. Aunque en verdad, por mandato del artículo 345 de la Constitución, en tiempo de paz no puede hacerse erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida en el Presupuesto de gastos, es de elemental previsión, acorde con una mínima responsabilidad del Estado en el manejo de sus recursos, que se contemplen en los presupuestos anuales partidas destinadas al pago de las obligaciones a su cargo y de los intereses que se generan por razón de los retardos en que incurra. La negligencia administrativa no puede ser fuente de enriquecimiento sin causa para las arcas estatales ni de injustificado perjuicio para los particulares con quienes él mantiene pasivos.

Se declararán inexecutable las expresiones que, en la norma, dan lugar a la injustificada e inequitativa discriminación objeto de examen, y que favorecen la ineficiencia y la falta de celeridad en la gestión pública.

Las mismas razones expuestas son válidas respecto del último inciso del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (Decreto Ley 01 de 1984), que dice:

"Las cantidades liquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después de este término".

Se declarará la unidad normativa y, por consiguiente, la disposición transcrita será declarada executable, salvo las expresiones "durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria" y "después de este término", que serán declaradas inexecutable.

Es entendido que, en las dos normas sobre cuya constitucionalidad resuelve la Corte, el momento en el cual principia a aplicarse el interés de mora depende del plazo con que cuente la entidad pública obligada, para efectuar el pago. Así, en el caso de la conciliación, se pagarán intereses comerciales durante el término que en ella se haya pactado y, vencido éste, a partir del primer día de retardo, se pagarán intereses de mora. En cuanto al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, a menos que la sentencia que impone la condena señale un plazo para el pago -evento en el cual, dentro del mismo se pagarán intereses comerciales-, los intereses moratorios se causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, sin perjuicio de la aplicación del término de dieciocho (18) meses que el precepto contempla para que la correspondiente condena sea ejecutable ante la justicia ordinaria."¹

Negritas del Despacho

En ese sentido, se tiene que el numeral sexto de la parte resolutive de la sentencia proferida por este Despacho, impartió orden de cumplimiento a la misma en los términos señalados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

Tal decisión fue objeto de apelación, y en segunda instancia a través de sentencia proferida por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 5 de junio de 2008, confirmando parcialmente la decisión tomada por éste Despacho Judicial, modificando el numeral tercero, disponiendo lo siguiente:

"TERCERO: Como consecuencia de la decisión anterior, ORDENASE a la Caja Nacional De Previsión (sic) liquidar en debida forma, reconocer y pagar al señor JORGE HUMBERTO SALAMANCA ROJAS, de condiciones civiles ya conocidas, el valor de la reliquidación de la pensión de jubilación a partir del 1 de enero de 2001, por retiro del servicio, en un monto del 75% del ingreso promedio recibido por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 1994 al 30 de diciembre de 2000, teniendo en cuenta, la asignación básica, la bonificación de servicios, las primas de servicio, navidad y vacaciones, de conformidad con la constancia

¹ Sentencia C-188/99 Referencia: Expediente D-2191. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 72 (parcial) de la Ley 446 de 1998. Demandantes: Ana María Acosta, Juliana Gómez, Cristina Trujillo, Adriana Gómez, Catalina Roza Y Claudia Ochoa Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO. Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., según consta en acta del veinticuatro (24) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999).

suscrita por el empleador. Al momento de hacer la liquidación para cancelar los valores resultantes de lo aquí dispuesto, se tendrá en cuenta para descontar lo ya aceptado y recibido.

La suma correspondiente deberá ser reajustada y actualizada en la forma indicada en la parte motiva.”

La decisión judicial fue debidamente notificada a las partes, quedando ejecutoriada la providencia el **20 de agosto de 2008** (fl. 39 cuaderno copias).

En consecuencia, los valores adeudados **a título de intereses moratorios**, deben ser aquellos que resulten de aplicar la fórmula respectiva, **sobre el capital adeudado al momento de la ejecutoria del fallo (20 de agosto de 2008)**, que fue el instante preciso en el que nació el derecho a reclamar las cantidades reconocidas en la sentencia, las cuales aunque no fueron liquidadas si son liquidables.

Es decir, lo que se sanciona es el no pago oportuno del derecho previamente reconocido.

Por ello, se hace necesario establecer los efectos temporales tanto del art. 177 del C.C.A., como los del art. 141 de la ley 100 de 1993, para concluir que no puede ninguna de las partes incluir intereses diferentes a los que genere el capital indexado al momento de la ejecutoria de la sentencia y mucho menos de las diferencias de la mesada pensional de los meses posteriores a la referida ejecutoria, como quiera que estos tienen un fundamento diferente al dispuesto en la sentencia para su reclamación, que es el referido art. 141 de la ley 100 de 1993 que señala:

“ARTICULO. 141. -Intereses de mora. *A partir del 1° de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.”*

Se debe decir que, y esto para llegar a la conclusión expuesta en precedencia y acogiendo el criterio expresado por la Corte Suprema de Justicia², en el cual se vienen denegando el reconocimiento de los referidos intereses del art. 141 de la ley 100 de 1993, en las demandas donde se solicita la reliquidación pensional, porque los plurimentados intereses solo se causan por la mora del pago, más no por el reconocimiento incompleto de la prestación.

² **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, MAGISTRADO PONENTE EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS**
Referencia: Expediente No. 38993, Acta No. 25, Bogotá D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil nueve (2010)
“Además ha sostenido esta Corporación que los intereses moratorios “...sólo proceden en el caso que haya mora en el pago de las mesadas pensionales, pero no cuando, como en este asunto ocurre, lo que se presenta es un reajuste a las mismas por reconocimiento judicial (Rad. 13717 – 30 junio de 2000), argumento este plenamente aplicable a este caso, pues la condena consistió en “los reajustes pensionales causados por su liquidación equivocada, actualizados anualmente a partir del 1° de enero de 1998, atendiendo el I.P.C. certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior.” Sentencia Radicación No. 26754 de 2006.”

Dicha posición fue reafirmada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL-1642018 cuando explicó:

“Lo anterior, partiendo de la base que la génesis de los intereses moratorios obedece a una necesidad resarcitoria y protectora frente a los derechos pensionales que no hayan sido reconocidos. Por lo tanto, ordenar una reliquidación de la mesada pensional, parte de la base de que el derecho ya fue adjudicado, aunque de manera errónea. Al respecto, fue abordado de manera reciente en sentencia CSJ SL164-2018, donde se esgrimió:

En lo que concierne a este punto, basta con recordar que a juicio de esta Corporación los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 proceden cuando existe mora o retardo en el pago de las pensiones, pero no frente a su pago incompleto o deficitario. Así, en sentencia CSJ SL21027, 4 sep. 2003, reiterada en SL11427-2016 y SL12765-2017, se adocrinó:

Además, ha sostenido esta Corporación que los intereses moratorios “sólo proceden en el caso que haya mora en el pago de las mesadas pensionales, pero no cuando, como en este asunto ocurre, lo que se presenta es un reajuste a las mismas por reconocimiento judicial” (Rad. 13717-30 de junio de 2000), argumento este plenamente aplicable a este caso, pues la condena consistió en “los reajustes pensionales causados por su liquidación equivocada, actualizados anualmente a partir del 1° de enero de 1998, atendiendo el I.P.C. certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior”.

Por ello concluye el despacho que lo que se sanciona es el no pago oportuno del derecho previamente reconocido.

Por otra parte, como fue expuesto, el artículo 177 del C.C.A, dispone el reconocimiento de intereses sobre las sumas liquidas reconocidas en la sentencia. Ahora las sentencias pueden dar órdenes en concreto o en abstracto, de ahí que se infiera que las sumas adeudadas sean liquidas o liquidables.

De otra parte, sobre los referidos intereses, se aclara que la liquidación de los mismos debe hacerse únicamente sobre el valor neto del capital y no sobre el capital bruto deprecado, es decir, sobre el capital respecto del cual ha de proyectarse los intereses y sobre el cual se libró mandamiento, necesariamente debe descontarse las sumas que van con destino a pagos de seguridad social en salud del pensionado, pues no es dable que sobre dichos rubros también se generen intereses en el entendido que dichas sumas no son percibidas por el actor y en todo caso solo podrían ser reclamados por la entidad prestadora del servicio de salud a la cual fueron girados.

Así mismo, se debe tener claridad que los intereses corresponden a los que se causaron desde la ejecutoria de la sentencia hasta el día anterior a la inclusión en nómina de pensionados, motivo por el cual, para asuntos como el presente, no podrá hablarse de actualización de liquidación del crédito, pues la causación de intereses culminó con antelación incluso a la presentación de la demanda ejecutiva.

En tal virtud, procede el Despacho a modificar la liquidación del crédito dentro del presente asunto, la cual quedará de la siguiente manera:

CAPITAL INDEXADO	\$	28.380.265.91	Fecha Ejecutoria:	20-ago-08	fl. 39
DESCUENTOS SALUD	\$	2.934.063.35	Fecha Nomina.	Abr 11	fl. 54
CAPITAL NETO	\$	25.446.202.56			

LIQUIDACIÓN DE INTERESES MORATORIOS

		CAPITAL	DIAS A PAGAR	% INT. CORRI	% INT. MORA	VALOR INT. MORA	INT. MORA ACUMULADO
20/08/2008	31/08/2008	\$ 25.446.202,56	11	21,51%	2,358%	\$ 219.977,52	\$ 219.977,52
01/09/2008	30/09/2008	\$ 25.446.202,56	30	21,51%	2,358%	\$ 599.938,68	\$ 819.916,20
01/10/2008	31/10/2008	\$ 25.446.202,56	31	21,02%	2,310%	\$ 607.441,14	\$ 1.427.357,34
01/11/2008	30/11/2008	\$ 25.446.202,56	30	21,02%	2,310%	\$ 587.846,26	\$ 2.015.203,61
01/12/2008	31/12/2008	\$ 25.446.202,56	31	21,02%	2,310%	\$ 607.441,14	\$ 2.622.644,75
01/01/2009	31/01/2009	\$ 25.446.202,56	31	20,47%	2,257%	\$ 593.339,11	\$ 3.215.983,85
01/02/2009	28/02/2009	\$ 25.446.202,56	28	20,47%	2,257%	\$ 535.919,19	\$ 3.751.903,04
01/03/2009	31/03/2009	\$ 25.446.202,56	31	20,47%	2,257%	\$ 593.339,11	\$ 4.345.242,15
01/04/2009	30/04/2009	\$ 25.446.202,56	30	20,28%	2,238%	\$ 569.466,32	\$ 4.914.708,46
01/05/2009	31/05/2009	\$ 25.446.202,56	31	20,28%	2,238%	\$ 588.448,53	\$ 5.503.156,99
01/06/2009	30/06/2009	\$ 25.446.202,56	30	20,28%	2,238%	\$ 569.466,32	\$ 6.072.623,31
01/07/2009	31/07/2009	\$ 25.446.202,56	31	18,65%	2,077%	\$ 546.085,26	\$ 6.618.708,56
01/08/2009	31/08/2009	\$ 25.446.202,56	31	18,65%	2,077%	\$ 546.085,26	\$ 7.164.793,82
01/09/2009	30/09/2009	\$ 25.446.202,56	30	18,65%	2,077%	\$ 528.469,60	\$ 7.693.263,42
01/10/2009	31/10/2009	\$ 25.446.202,56	31	17,28%	1,939%	\$ 509.901,51	\$ 8.203.164,93
01/11/2009	30/11/2009	\$ 25.446.202,56	30	17,28%	1,939%	\$ 493.453,07	\$ 8.696.618,00
01/12/2009	31/12/2009	\$ 25.446.202,56	31	17,28%	1,939%	\$ 509.901,51	\$ 9.206.519,51
01/01/2010	31/01/2010	\$ 25.446.202,56	31	16,14%	1,823%	\$ 479.377,39	\$ 9.685.896,90
01/02/2010	28/02/2010	\$ 25.446.202,56	28	16,14%	1,823%	\$ 432.986,03	\$ 10.118.882,94
01/03/2010	31/03/2010	\$ 25.446.202,56	31	16,14%	1,823%	\$ 479.377,39	\$ 10.598.260,33
01/04/2010	30/04/2010	\$ 25.446.202,56	30	15,31%	1,738%	\$ 442.171,37	\$ 11.040.431,70
01/05/2010	31/05/2010	\$ 25.446.202,56	31	15,31%	1,738%	\$ 456.910,41	\$ 11.497.342,11
01/06/2010	30/06/2010	\$ 25.446.202,56	30	15,31%	1,738%	\$ 442.171,37	\$ 11.939.513,47
01/07/2010	31/07/2010	\$ 25.446.202,56	31	14,94%	1,699%	\$ 446.827,74	\$ 12.386.341,21
01/08/2010	31/08/2010	\$ 25.446.202,56	31	14,94%	1,699%	\$ 446.827,74	\$ 12.833.168,96
01/09/2010	30/09/2010	\$ 25.446.202,56	30	14,94%	1,699%	\$ 432.413,94	\$ 13.265.582,90
01/10/2010	31/10/2010	\$ 25.446.202,56	31	14,21%	1,623%	\$ 426.811,40	\$ 13.692.394,31
01/11/2010	30/11/2010	\$ 25.446.202,56	30	14,21%	1,623%	\$ 413.043,29	\$ 14.105.437,60
01/12/2010	31/12/2010	\$ 25.446.202,56	31	14,21%	1,623%	\$ 426.811,40	\$ 14.532.249,00
01/01/2011	31/01/2011	\$ 25.446.202,56	31	15,61%	1,769%	\$ 465.054,97	\$ 14.997.303,98
01/02/2011	28/02/2011	\$ 25.446.202,56	28	15,61%	1,769%	\$ 420.049,65	\$ 15.417.353,63
01/03/2011	31/03/2011	\$ 25.446.202,56	31	15,61%	1,769%	\$ 465.054,97	

En mérito de lo expuesto, en los términos del artículo 446 del Código General del Proceso, el Despacho modificará la liquidación del crédito en la manera como quedó descrita en el anterior cuadro, la cual quedará por un monto total de **QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON SESENTA PESOS M/CTE (\$15.882.408.60), por concepto de intereses moratorios.**

Para tal efecto se arriba soporte en cuadro de Excel en medio magnético de la liquidación del crédito.

En virtud de lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO allegada por la parte demandante y en su lugar aprobar la realizada por el Despacho, por un monto total de **QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON SESENTA PESOS M/CTE (\$15.882.408.60)**, en los términos del cuadro realizado en la parte motiva del presente proveído.



SEGUNDO: Prevenir al Doctor Juan David Gómez Barragán, Subdirector de Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP, para que se abstenga de proferir actos administrativos en los términos señalados en la parte motiva de la providencia, so pena de dar aplicación a lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.

TERCERO: En firme esta providencia continúese con el trámite respectivo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
Juez

FV

 JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. Por anotación en ESTADO ORDINARIO notifico a las partes la providencia anterior hoy 16 DE JULIO DE 2019 , a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)  LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA SECRETARIA
--

